

Sobre las redes de seguridad de Chile y Perú

Pedro Arruda y Manoel Salles, Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG), y Luísa A. Nazareno, consultora

Este One Pager va a sintetizar los amplios encuentros de un *Working Paper* mayor (Arruda, 2016) sobre las políticas sociales y los programas de Chile y Perú. La red de protección social de estos países son mayormente el resultado de acciones responsivas, determinadas por sus contextos socio-políticos y económicos.

Ambos países hacen encuestas para monitorear sus precios, y sus umbrales de pobreza doméstica y pobreza extrema son definidos de acuerdo a estas. Sus encuestas de hogares nacionales también dejan que las autoridades estimen la incidencia de pobreza. Los países también poseen instrumentos enfocados en priorizar los hogares más vulnerables a políticas sociales y programas. El instrumento de enfoque chileno – las Fichas de Protección Social (FPS) – es derivado de un previo instrumento construido en 1979, y esto permite una cobertura más amplia, y un protocolo más preciso para la validación de data que el instrumento peruano, que ha sido concebido recientemente, en el 2007.

Cuando se trata de políticas y programas de salud, educación, y protección social, ambos países enfrentan distintos retos como resultado de su historia. En Chile, muchos de estos servicios fueron privatizados durante el mandado de Pinochet, pero siguiendo la re-democratización del país, las limitaciones de este modelo fueron percibidas, en términos de falta de cobertura, y la carga excesiva de las familias más pobres, que resulta en más desigualdad. En Perú, estos servicios fueron históricamente hechos universales y públicos, a pesar de los embotellamientos de calidad y la falta de recursos, que han dejado al gobierno a buscar suplementos de instituciones privadas, y a dedicar sus esfuerzos hacia esquemas contribuidores que benefician diferentes grupos de la población.

El sistema de seguro de salud de Chile, que hasta 1973 fue público y universal, fue privatizado, resultando en costos mayores y menor cobertura. El sistema educacional transfiere responsabilidades a los gobiernos sub-nacionales y se convirtió muy dependiente de relaciones públicas-privadas, en cuanto la seguridad social fue enteramente privatizada (excepto por los beneficiarios restantes del antiguo seguro de pensiones). Sin embargo, con la re-democratización, una serie de garantías mínimas fueron requeridas por políticas de seguro de salud, como también un límite en contribuciones beneficiarias, y un sistema de seguro de salud no-contribuidor fue creado para las poblaciones más pobres.

El financiamiento para la educación comenzó a beneficiar a escuelas con un mayor número de estudiantes dentro de un umbral de vulnerabilidad (mayormente escuelas públicas), y programas adicionales – como Chile Crece Contigo—fueron establecidos para proveer beneficios de ingreso, salud prioritaria, y cuidado educacional y psicosocial para los niños más pobres y sus familias. Además, el presupuesto para el programa de comida de escuelas chilenas ha aumentado significativamente, y generalmente, estas iniciativas operan en tándem para que las familias más vulnerables ganen acceso a servicios que son muy caros para ellos y a otros programas e iniciativas disponibles. El sistema de seguridad social del país comenzó a incorporar componentes semi-contribuidores y no-contribuidores, y tomó pasos para asegurar beneficios básicos hasta para los que no son capaces de contribuir regularmente.

El sistema de seguro público de Perú ha sufrido tradicionalmente de embotellamientos financieros y de calidad, dejando el gobierno dividido en dos (contribuidor y no-contribuidor) desde el 2009, y el sector privado estimulado. Esta duplicidad es criticada, históricamente, ya que los beneficiarios de un sistema no pueden usar los servicios de un hospital financiados por el otro. Recientes esfuerzos que incluyen caminos más claros para un fondo reembolsar a la otra para los servicios de siempre se han hecho con el objetivo de aliviar las restricciones de usuario.

La provisión de educación pública en Perú, a pesar de representar el segundo mayor gasto social, todavía es menor que la media de Latinoamérica, y debería ser expandido y mejor manejado para atestiguar una mejor



calidad y cobertura. Sin embargo, la nacionalización reciente del programa alimenticio escolar *Qali Warma* indica que el gobierno central ha logrado entender que puede tomar un rol más activo en el mejoramiento de la situación.

Los sistemas de seguridad social de ambos países se han convertido en entidades de múltiples columnas. La trayectoria peruana fue muy diferente de la chilena, ya que la expansión de pensiones privadas fue simulada en Perú como estrategia para aliviar – no terminar – el sistema público '*pay-as-you-go*' (PAYGO). Más recientemente, Perú también ha lanzado un importante sistema de pensiones no-contribuidor, y semi-contribuidor que intenta cubrir a aquellos que no son servidos por el PAYGO público, ni los esquemas capitalistas fundados privadamente. Se puede aprender una lección de Perú sobre las cargas inerciales creadas por su sistema de pensiones anterior, el cual creó una falta de progresividad y sostenibilidad fiscal. Hoy en día, el país tiene que incurrir a gastos públicos extremos para mantener sus sistemas contribuidores para los niveles más altos del ejército y burócratas públicos, lo cual no es progresivo ni financieramente sostenible.

Ambos países utilizan programas de '*conditional cash transfer*' (CCT) para gente viviendo debajo de la línea de pobreza. El CCT tradicional de Chile – Chile Solidario – esta gradualmente abriendo camino para – Ingreso Etico Familiar – cual intensifica el foco en el cuidado psicosocial para proteger a la población anciana, y promueve la participación en el mercado de labor. Este paga mayores beneficios de efectivos en cuanto también se asegura de que una porción de los pagos llegue a beneficiarios sin condicionalidades; también hay una suma que es pagada como un bono por logros específicos (ej. Mujeres que encuentran trabajo, estudiantes que son los mejores de sus clases).

En cierre, ambos países tienen redes de seguridad integrales que han probado ser relevantes servicios en áreas centrales como salud, educación, seguridad social, seguridad de renda y asistencia social. Estos servicios fueron construidos para ser operados progresivamente, con criterio objetivo basados en los umbrales de pobreza nacional, los cuales son monitoreados por encuestas robustas. Algunos de los retos principales de Perú tienen que ver con la falta de provisión y constreñimientos fiscales, como también la necesidad de reducir la superposición de algunos proyectos en ciertas áreas (ej. Servicios de salud y seguridad social), en cuanto Chile parece ser presionado por la necesidad de extender y expandir el rol del Estado en ciertas áreas, como la educación y la seguridad social.

Referencia:

de Arruda, Pedro Lara et al. 2016. "Overview of Chilean and Peruvian social policies: impressions from a study tour." *IPC-IG Working Paper*, No. 148. Brasilia: International Policy Centre for Inclusive Growth.